



**JUZGADO DECIMO ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.
SECCIÓN SEGUNDA**

Bogotá D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Ref. Proceso	11001333501020160032400
Clase Proceso	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Demandante	NACIÓN- CONGRESO DE LA REPÚBLICA- CÁMARA DE REPRESENTANTES
Demandado	MARÍA DEL CARMEN AGUILAR JIMÉNEZ
Asunto	RESUELVE SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR

Acorde con lo previsto por el inciso cuarto del artículo 233 de la Ley 1437 de 2011, procede el Despacho a decidir la solicitud de medida cautelar presentada por la parte accionante¹.

I. ANTECEDENTES

1. La entidad NACIÓN- CONGRESO DE LA REPÚBLICA- CÁMARA DE REPRESENTANTES, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de que trata el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, interpuso demanda contra la señora MARÍA DEL CARMEN AGUILAR JIMÉNEZ- tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones Nros. 1080 del 15 de junio de 2006 y 3685 de 09 de diciembre de 2010, mediante las cuales se reajustó una prima técnica a la señora MARIA DEL CARMEN AGUILAR.

En consecuencia, declarar que la citada señora no tiene derecho a seguir disfrutando el reajuste de la prima técnica reconocida a través de los actos demandados, y condenarla a la devolución de las sumas de dinero pagadas por concepto de reajuste de prima técnica durante el periodo comprendido entre el 15 de junio de 2006, con la indexación de los valores a restituir.

2. Argumenta la entidad demandante, en síntesis, que los actos administrativos demandados no se ajustaron a la legalidad, habida cuenta que el cargo de mecanógrafa que para el momento de la presentación de la demanda ostenta la señora MARIA DEL CARMEN AGUILAR, no está contemplado en los cargos del nivel directivo, jefe de oficina asesora y a los de asesor, cuyo empleo se encuentra adscrito a los despachos, ni es un cargo de carácter permanente catalogado como del nivel directivo, asesor o ejecutivo. Señala que el cargo inicial de la accionada como mensajera en carrera administrativa y el cargo posterior como mecanógrafa en encargo, no son susceptibles de reconocimiento de prima técnica, porque si bien es cierto al momento de la posesión de la servidora la norma vigente era el decreto 1661 de 1991, la norma vigente al momento del reconocimiento de la prima, era el decreto 1336 de 2003, la cual había restringido el pago de la prima técnica a ciertos

¹ Dentro del mismo escrito de la demanda

niveles profesionales, en los cuales no se encontraba inmerso ninguno de los cargos ocupados por la demandada.

3. Dentro del mismo escrito de demanda, la entidad establece el acápite de *"PETICIÓN PREVIA DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL"* en la cual eleva solicitud de suspensión provisional las resoluciones números 1080 de 15 de junio de 2006 y 3685 de 09 de diciembre de 2010, mediante la cual se reajustó la prima técnica a la señora María del Carmen Aguilar.

Sustenta su solicitud en que es oportuno traer a colación lo que ha resuelto el Consejo de Estado, consistente en que la suspensión provisional es un control de legalidad mediante el cual se autoriza a la jurisdicción contencioso administrativa a dejar transitoriamente sin efectos, un acto susceptible de impugnación por la vía judicial cuando exista abierta contradicción entre el mismo y la ley, siendo procedente la suspensión provisional para proteger el interés público con el fin de evitar un perjuicio grave a los administrados con el cumplimiento de actos contrarios a la ley; por lo expuesto solicita se suspenda provisionalmente el exceso en el pago de una prima técnica a la demandada, toda vez que no tiene derecho a ella y para su reconocimiento no se tuvo en cuenta la normatividad vigente para tal efecto.

Insiste en que, de mantenerse el pago de la prima técnica, está generando un detrimento en las arcas del Estado y se está generando un enriquecimiento sin causa en cabeza de la servidora.

II. EL TRÁMITE SURTIDO

4. El Despacho a través de providencia de 30 de enero de 2017, admitió la demanda formulada por la NACIÓN- CONGRESO DE LA REPÚBLICA- CÁMARA DE REPRESENTANTES, y ordenó la notificación de la demandada MARÍA DEL CARMEN AGUILAR JIMÉNEZ.

5. Respecto a la solicitud de suspensión provisional, en cuaderno separado se emitió y agregó auto de la misma fecha del admisorio (30 de enero de 2017), en el cual se ordenó de conformidad con el artículo 233 del CPACA, por secretaría del despacho correr traslado de la solicitud de medida cautelar a la demandada por el término de cinco días.

6. Dada la imposibilidad material de notificar la demanda (al igual que de la solicitud de suspensión provisional) a la señora MARIA DEL CARMEN AGUILAR JIMÉNEZ, el juzgado mediante auto de 08 de noviembre de 2019 ordenó su emplazamiento, y mediante auto de 28 de abril de 2022 ordenó el nombramiento de curador ad litem en los términos del artículo 48 del CGP, para representar los intereses de la demandada.

7. Dentro de las designaciones como curadores realizadas por secretaría, el abogado ENDER CÁRDENAS REYES manifestó mediante correo de 25 de mayo de 2022 que acepta el cargo de curador, y que en cuanto a la posesión ruega se realice en lo posible de manera virtual o por correo electrónico, dados unos problemas de salud que describe.

8. A lo anterior, mediante correo electrónico de 25 de mayo de 2022, por secretaría se le solicitó al abogado que, previo a efectuar la posesión como curador, se le requiere allegar copia de la cédula de ciudadanía y de la tarjeta profesional, a lo que el abogado procedió a remitir tales documentos en correo de 02 de junio de 2022.

9. Así las cosas, el suscrito Funcionario y el secretario de este juzgado, firmaron el acta de posesión con fecha 12 de julio de 2022, del abogado en cita como curador ad-litem, para actuar dentro del proceso, y se le notificó del acta de posesión mediante correo electrónico de 13 de julio de 2022², de la demanda y de la **medida cautelar** Nro. 2016-324, para lo cual además se adjuntó link del expediente virtual; quedando así notificada la posesión al curador el 13 de julio, junto con la demanda y la solicitud de suspensión provisional, frente a las cuales el curador ad litem no allegó pronunciamiento alguno.

IV. PARA RESOLVER SE CONSIDERA

10. Para efectos de resolver la solicitud de medida cautelar elevada por la entidad demandante, sea lo primero recordar que de acuerdo con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 229 de la Ley 1437 de 2011, en todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, el Juez o Magistrado Ponente, a petición de parte podrá decretar las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia.

11. Por su parte, el artículo 230 de la misma ley establece que las medidas cautelares pueden ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deben tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda, por lo tanto, se podrán decretar cualquiera de las medidas allí señaladas, entre las cuales, se encuentra la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo.

12. Además, el artículo 231 ibídem establece que cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud y, cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento de un derecho y la indemnización de perjuicios, se deberá probar al menos sumariamente la existencia de los mismos.

13. Descendiendo al caso concreto se observa que la entidad demandante pretende la nulidad de resoluciones números 1080 de 15 de junio de 2006 y 3685 de 09 de diciembre de 2010, en las que se observa, se efectuó un reajuste y ordenó el pago de un porcentaje por concepto del emolumento denominado “prima técnica” a varios servidores, entre ellos a la demandada María del Carmen Aguilar Jiménez; y a título de restablecimiento del derecho solicita se ordene a la demandada, que reintegre la totalidad de las sumas canceladas en virtud del reajuste de prima técnica ordenada en dichos actos, las que deberán ser indexadas al momento del pago.

14. En este estadio de la discusión, es menester precisar que de la lectura de los actos enjuiciados, se colige que en ellos no se dispuso el reconocimiento de la prima técnica a la demandada, sino el reajuste de la misma, teniendo en cuenta que con antelación ya tenía reconocido el emolumento con anterioridad a la expedición de los decretos 1724 de 1997 y 1336 de 2003.

Ahora bien, el reajuste del emolumento salarial, es lo que pretende controvertir la entidad accionada, habida cuenta que a su juicio, este reajuste concedido a la

² Ley 2213 de 2022, artículo 8: “**ARTÍCULO 8º. NOTIFICACIONES PERSONALES.** Las notificaciones que deban hacerse personalmente también podrán efectuarse con el envío de la providencia respectiva como mensaje de datos a la dirección electrónica o sitio que suministre el interesado en que se realice la notificación, sin necesidad del envío de previa citación o aviso físico o virtual. Los anexos que deban entregarse para un traslado se enviarán por el mismo medio.” (Subrayado fuera de texto).

servidora pública contraviene los decretos en cita, así como los decretos 915 de 2005, 374 de 2006, 602 de 2007 y 2900 de 2008, por cuanto los mismos restringieron la asignación de la prima técnica a servidores con nombramiento en cargos distintos al de la accionante, por consiguiente a juicio de la entidad ella no tenía derecho al reajuste.

Observando lo anterior y analizada por otra parte, la argumentación presentada por la parte demandante para proceder al decreto la suspensión provisional, el Despacho la considera insuficiente para disponer de tal medida en este estadio procesal, como quiera que el Juzgado no evidencia que con la expedición de las resoluciones acusadas se hayan violado de manera visible y notoria, las normas que se invocan como violadas en el escrito de la demanda, pues hay que tener en cuenta en principio que, la accionada ya tenía un reconocimiento previo de la prima técnica con base en normas anteriores a las que se invocan como violadas por los actos que posteriormente ordenaron el reajuste.

Al no observarse de manera palmaria hasta el momento, vulneración de las normas invocadas en la demanda, considera esta Agencia Judicial que se necesario evaluar a fondo la legalidad de los actos acusados, a través del trámite del proceso y la resolución final del fondo del asunto en la sentencia, con fundamento en jurisprudencia, normas y las pruebas que legal y oportunamente se logren recaudar.

Se itera, no existen elementos de orden fáctico que lleven a concluir una posible afectación de las normas sobre las cuales deben fundarse los actos acusados y por contera una violación de los intereses públicos invocado como fundamento de la medida cautelar. Tampoco existe un riesgo de que, al no adoptarse la medida cautelar, sobrevenga un perjuicio o daño mayor del que se expone en la demanda que, de no precaverse, transforme en tardío el fallo definitivo.

De hecho, en uno de los intentos fallidos de notificarle la demanda a la señora MARIA DEL CARMEN AGUILAR JIMÉNEZ, el informe de notificación de la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos de fecha 22 de septiembre de 2017, da cuenta de que se intentó la notificación en la dirección carrera 7 Nro. 8-68 (según página web corresponde a la ventanilla de la Cámara de Representantes)³, y que la notificación no se pudo realizar porque *“AL MOMENTO DE LA DILIGENCIA EN LA CITADA DIRECCIÓN ME INFORMARON, QUE LA SEÑORA MARIA YA SALIÓ PENSIONADA⁴”*.

Lo anterior si bien no es un documento idóneo que acredite retiro definitivo del servicio, si le genera un indicio al juzgado de que la señora María del Carmen Aguilar probablemente ya no se encuentre laborando para la entidad y devengando la prima técnica, razón por la cual en este momento tampoco se logra dilucidar un riesgo de que, de no accederse a la medida de suspensión, sobrevenga un perjuicio o daño mayor para la entidad.

Por consiguiente, el Despacho no accederá al decreto de la medida cautelar por cuanto se encuentra necesario evaluar la situación de quien percibe (o percibió) este emolumento salarial, con fundamento en jurisprudencia, normas y las pruebas que legal y oportunamente se logre recaudar, valorándolas en la etapa procesal correspondiente.

³ <https://www.camara.gov.co/contactenos>

⁴ Página 197 expediente físico

En razón a lo anterior, este despacho

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR la solicitud de suspensión provisional de las resoluciones números 1080 de 15 de junio de 2006 y 3685 de 09 de diciembre de 2010, presentada por la entidad accionante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Una vez en firme la presente decisión, ingrese de nuevo el expediente al Despacho, para continuar con el trámite procesal que corresponda.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

**AUGUSTO LLANOS RUIZ
JUEZ**

A.O.-

Firmado Por:
Augusto Llanos Ruiz
Juez Circuito
Juzgado Administrativo
010
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: b3a88be9b2f61d2f7ed1ba6b267d60b483f25a6bf3b195fe6d12cd3d1a5e4daf

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: <https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>